



RESOLUCIÓN N° 0702, 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de las facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 4°, literal n) del Decreto Distrital 550 de 2006; 43 del Decreto Nacional 1469 de 2010; 1° del Decreto Distrital 191 de 2006, 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y el Decreto Distrital 004 del 2 de enero de 2012, teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Que el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., expidió la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, para la construcción del edificio denominado Comedor Escuela de Cadetes General Santander, ubicado en la AC 45 A S 45 A 15 IN 1 (actual) y AC 45 A S 45 A 15 IN 2 (actual) (folio 432).

Que mediante la radicación No. 1-2012-11679 del 9 de marzo de 2012, el doctor Ernesto Camilo Cúellar Melo, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D. C., solicitó ante la Secretaría Distrital de Planeación la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., argumentando (folios 463 a 469):

"4. FUNDAMENTOS DE HECHO:

En la revisión del trámite de expedición de la Licencia de Construcción LC 11-1-0266 del 27 de abril del 2011, para el predio ubicado en la Avenida Calle 45 A Sur No. 45 A-15 Int. 1, de la localidad de Tunjuelito, expedida por el Arquitecto Juan Reinaldo Suárez Medina ex Curador Urbano No. 1, se evidenció por parte de esta Comisión, que el trámite de expedición de licencia no contó con la aprobación previa del anteproyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, en contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 26 del Decreto 606 de 2001 y 3 de la Resolución No. 0199 de 2004.

En este sentido, el Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D. C. hace ver que Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a través del oficio 2011-210-002133-1 del 16 de agosto de 2011, solicitó a la doctora Claudia Yepes Londoño ex Curadora Urbana N. 1 Provisional de Bogotá D.C., información respecto del procedimiento llevado a cabo para el otorgamiento de la licencia No. LC 1-1-0266 del 27 de abril de 2011, aquí estudiada, advirtiéndole que el referido inmueble se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural de la ciudad, en la Categoría de Conservación Integral, definido en el artículo 4 del Decreto Distrital 606 de 2001 y:



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

"Teniendo en cuenta su condición de Bien de Interés Cultural, el proyecto fue radicado a este instituto para su aprobación el pasado 8 de febrero de 2011, con el número 2011-210-000458-2 y fue presentado en sesión No. 4 del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, del 2 de marzo de 2011, el cual conceptuó:

"Es necesario hacer un estudio detallado de las características volumétricas del área declarada para determinar los elementos tenidos en cuenta para la propuesta del comedor. Debe presentarse un registro fotográfico y una valoración del área inmediata a la intervención que incluya el Edificio Humberto Antonio Castellanos, las pesebreras y los edificios de músicos, que permita determinar el impacto de la edificación propuesta para el sector donde se implanta.

Después de verificarse el área propuesta en el plano general que adopta la Resolución No. 199 de 2004 para que la propuesta puntual del Comedor se ajusta (sic) a las condiciones inicialmente aprobadas.

Es necesario adelantar un estudio de las fachadas de los edificios declarados (sic), que servirán de soporte para el planteamiento de fachada del edificio de comedores, es de vital importancia entender la arquitectura presente en la Escuela de Policía como austera, sin recargues ornamentales, que debe reflejarse tanto en las plantas como en la volumetría presentada.

Debe ajustarse la totalidad de la planimetría presentada de acuerdo con lo contenido en la "Guía y estándares para el desarrollo gráfico de proyecto, documentaciones sobre práctica profesional", del Consejo Profesional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares y presentarse nuevamente al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural".

El proyecto fue ajustado por el solicitante y radicado nuevamente a este instituto con el número 2011-210-003823-2 del 11 de julio de 2011 y presentado en la sesión No. 14 del Comité Técnico Asesor de Patrimonio del 21 de julio de 2011, el cual conceptuó.

"Si bien fueron acogidas las recomendaciones del comité en las plantas arquitectónicas, aplicando el concepto de sobriedad, en la fachadas se requiere hacer una revisión de las condiciones de lenguaje y acabado (pañete a la vista y pintura blanca), a partir de las características de las edificaciones existentes y presentarse nuevamente al Comité Técnico Asesor de Patrimonio".

Como se evidencia, este proyecto no ha sido aprobado por este Instituto a pesar de ser requisito para la expedición de la licencia de construcción para los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital de conformidad con lo establecido en los Decretos Distritales 606 de 2001 y 190 de 2004, por lo que solicito se informen las razones de no haber contado con dicha aprobación previa a la expedición de la Licencia de Construcción LC 11-1-0266 del 27 de Abril de 2011." (Negrillas y Subrayas fuera de texto)".

Concluyendo que:

"De todo lo anterior se colige, que para la fecha de expedición de la licencia de construcción (27 de abril de 2011) por parte del Curador Urbano No. 1 Juan Reinaldo Suárez Medina, no se había dado cumplimiento por parte del solicitante a lo establecido en



Continuación de la Resolución No. **0702** 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

el Decreto 606 de 2001 y en la Resolución 0199 de 2004, respecto de la obtención de la aprobación del Anteproyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, como requisito previo al trámite de expedición de licencia de construcción, conclusión a la que se llega, después de leer la manifestación hecha por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en su oficio No. 2011-210-002133-1 del 16 de agosto de 2011, según la cual, para la fecha, aun no se encontraba aprobado el anteproyecto por dicho Comité, razón que hacía improcedente la expedición de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes que regulan las intervenciones en Bienes de Interés Cultural, ya citadas.

(...)

DEL ERROR DE HECHO EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS:

En el presente caso, se aprecia que el Ex -Curador Urbano No 1, Arquitecto Juan Reinaldo Suárez Medina incurrió en un error de hecho en la apreciación de las pruebas obrantes en el expediente, como quiera que aprobó la intervención de un bien que hace parte del inventario de patrimonio cultural de la ciudad, sin contar con la prueba exigida y necesaria por la normatividad urbanística vigente como requisito previo de dicha intervención, como es el documento de aprobación del anteproyecto, expedida por el Comité Técnico Asesor de Patrimonio, en contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 26 del Decreto 606 de 2001 y 3 de la Resolución No. 0199 de 2004.

(...)

Como conclusión de todo lo anterior, la presencia de este vicio de la voluntad llevó a que el Ex Curador Urbano No 1, Arquitecto Juan Reinaldo Suárez Medina, expidiera irregularmente la licencia mencionada, vulnerando las normas urbanísticas que regulan las intervenciones de los predios de interés cultural, dada la inexistencia en el trámite de expedición de licencia por él adelantado, del documento de aprobación del anteproyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, prueba sin la cual no podía expedirse el acto administrativo de licenciamiento.

Así entonces, se considera que se configuró el medio ilegal por error en la interpretación de las pruebas que motiva la solicitud de la revocatoria directa de la Construcción (Sic) LC 11-1-0266 del 27 de abril del 2011, para el predio ubicado en la Avenida Calle 45 A Sur No. 45 A-15 Int. 1, de la localidad de Tunjuelito, expedida por el Ex Curador Urbano No 1, Arquitecto Juan Reinaldo Suárez Medina”.

Que el 14 de marzo de 2012, mediante el memorando 3-2012-02589 el Director de Patrimonio y Renovación Urbana trasladó a la Subsecretaría Jurídica el oficio 2-2012-14427 de marzo 7 de 2012, radicado SDP 1-2012-11675, que contiene el informe presentado por esa Comisión para el caso No. 995, informando que (folios 473 a 477):

“El predio localizado en la Avenida 27 No. 40-01 sur, Calle 45 A sur No. 45 A-15, Carrera 33 No. 48 A-15 sur perteneciente a la Escuela General Santander se encuentra declarado Inmueble de Interés Cultural, Categoría de Conservación Integral (CI) mediante el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001, “Por medio del cual se adopta el inventario de algunos



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Bienes de Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones”.

Por tal motivo, para toda intervención a realizarse en el citado predio debe obtenerse concepto previo favorable por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Distrital 606/2001 y el Decreto Distrital 048 de febrero 12 de 2007, “Por el cual se asigna la función de aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural”.

Mediante radicación 1-2011-43268, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC manifestó a la Secretaría Distrital de Planeación que “...La licencia de construcción LC 11-1-0266-2 del 27 de abril de 2011 para la construcción en obra nueva del Edificio de Comedores de la Escuela de Policía General Santander, fue expedida por la Curaduría Urbana No. 1, sin contar con concepto previo por parte de la Institución, solicito se haga una revisión del procedimiento llevado a cabo para expedir dicho documento y se tomen las medidas pertinentes contempladas dentro de la vigente, respecto a la violación de la legislación urbanística para este tipo de intervenciones”, para lo cual la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana informó del traslado de dicha solicitud a la Comisión de Veeduría de los Curadores Urbanos de Bogotá de la Secretaría Distrital del Hábitat para su conocimiento y fines pertinentes, mediante oficio 2-2011-42489 de noviembre 10 de 2011. Mediante oficio 2-2012-42497 de la misma fecha, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana traslada la petición del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a la Comisión de Veeduría de los Curadores Urbanos de Bogotá, para su conocimiento y fines pertinentes.

Posteriormente, mediante oficio 2-2012-00235 de enero 3 de 2012, radicado SDP 1-2012-00309, el Subsecretario (a) de Inspección, vigilancia y control de Vivienda de la Secretaría Distrital de Hábitat informa a esta Dirección que “...de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 134 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, y en aras de esclarecer los hechos mencionados en su solicitud, se dispuso la apertura del CASO No. 995 para el predio ubicado en la Avenida Calle 45 A sur No. 45 A-15. Una vez la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C. realice los estudios pertinentes, se les informará oportunamente el resultado”.

Finalmente, mediante oficio 2-2012-14427 de marzo 7 de 2012, radicado SDP 1-2012-11675, el Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá comunica a la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana que se “...revisó la solicitud de licenciamiento para el predio ubicado en la Avenida Calle 45 A sur No. 45 A-15 Escuela General Santander de esta ciudad, disponiendo solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación, la Revocatoria Directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, toda vez que el trámite de expedición de licencia no contó con la aprobación previa del anteproyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, en contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 26 del Decreto 606 de 2001 y 3 de la Resolución No. 0199 de 2004...”.

Que con el fin de atender la solicitud revocatoria directa solicitada por la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, la Dirección de Trámites Administrativos de la Secretaría Distrital de Planeación el 14 de marzo de 2012, solicitó a Control de Prestamos del Archivo



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

General de la entidad, el expediente que dio origen a la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. para el predio ubicado en la Avenida Calle 45 A Sur No. 45 A – 15 interior 1 de la Localidad de Tunjuelito (folios 470 y 471).

Que el 14 de marzo de 2012, el Archivo General de la entidad informó, que a la fecha, la licencia de construcción mencionada no ha sido transferida por la Curaduría Urbana 1 de Bogotá D.C. al archivo central de predios (folios 470 y 471).

Que de acuerdo con la información precedente, la Dirección de Trámites Administrativos solicitó al Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. remitir el expediente que dio origen a la expedición de Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011 a esta entidad (folio 472) y, éste lo envió el 28 de marzo de 2012 con la radicación No. 1-2012-14894 (folio 478).

Que allegado el expediente, la Dirección de Trámites Administrativos, mediante auto del 30 de marzo de 2012 avocó el conocimiento de la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. (folios 479 y 480), disponiendo convocar a la titular del acto administrativo objeto de trámite, en el presente caso a *"LA NACIÓN POLICÍA NACIONAL NIT/CC:899999003-1 REPRESENTANTE LEGAL: ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO CC. 19349674"*, o a quien haga sus veces, para que dentro del término de diez (10) días, si lo consideraba pertinente se hiciera parte dentro del trámite presentando sus comentarios u observaciones y manifestando de manera expresa y por escrito, si concedía o no su consentimiento para revocar la licencia de construcción referida.

Con el auto citado, se decidió igualmente solicitar concepto a la parte técnica y poner el expediente a disposición de los interesados, para que puedan consultarlo, conocer los conceptos técnicos proferidos por esta entidad y, solicitar y obtener copias de las actuaciones administrativas relacionadas con el trámite.

De conformidad con lo señalado en precedencia, se expidieron las siguientes comunicaciones:

Acto Administrativo	Fecha	Destinatario
3-2012-03195	30-III-12	Subsecretaría de Planeación Territorial (folio 481)
2-2012-14533	30-III-12	Mayor General ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO. Director General de la Policía Nacional. (folio 482)

Que mediante la radicación 1-2012-17590 del 18 de abril de 2012, el Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo presentó sus observaciones y consideraciones a los argumentos expuestos por la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C. en la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011,



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., manifestando que de conformidad con lo previsto en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo³ no otorga "(...) EL CONSENTIMIENTO PARA LA REVOCATORIA DIRECTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LC 11-1-0266 DEL 27 DE ABRIL DE 2011. PARA EL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 45 A SUR No. 45 A- 15 INT. 1. DE LA LOCALIDAD DE TUNJUEUTO. EXPEDIDA POR EL ARQUITECTO JUAN REINALDO SUARÉZ MEDINA". Esto especialmente, por tratarse de un acto de carácter particular y concreto y, por no presentarse ninguna de las causales de revocatoria previstas en el Código Contencioso Administrativo.

Al efecto, el Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo manifestó (folios 484 a 492):

"1.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL ARGUMENTO ESGRIMIDO POR LA COMISIÓN DE VEEDURÍA DE LAS CURADURÍAS URBANAS

1.1. Pronunciamiento en cuanto a la competencia de la Comisión para solicitar La revocatoria que nos ocupa y configuración de violación al debido proceso previsto por la norma especial en cuanto a revocatoria de Licencias urbanísticas.

Al respecto se resalta al honorable Despacho, que no se comparte el argumento sobre la legitimidad y la oportunidad de la Comisión de Veedurías Urbanas para solicitar la revocatoria de la licencia cuestionada al no cumplirse con uno de los requisitos de procedibilidad, lo que configura una violación al debido proceso en la actuación de revocatoria que se adelanta por su Despacho y que origina el presente pronunciamiento.

No se discute la competencia de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas para solicitar revocatoria de licencias urbanísticas expedidas por los Curadores Urbanos, pero en el caso concreto no se cumple con uno de los requisitos del procedimiento de revocatoria regulado en forma especial por el Decreto 1469 de 2010 "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas: al reconocimiento de edificaciones a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones" y que expresamente señala en el artículo 43:

"Artículo 43. De la revocatoria directa. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo con las precisiones señaladas en el presente artículo:

1. Son competentes para adelantar la revocatoria directa de las licencias, el mismo curador que expidió el acto o quien haya sido designado como tal mediante acto administrativo de manera provisional o definitiva, o el alcalde municipal o distrital o su delegado.

³ "ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
(...)"



Continuación de la Resolución No. **0702** 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

2. Podrán solicitar la revocatoria directa de las licencias los solicitantes de las mismas, los vecinos colindantes del predio objeto de la solicitud así como los terceros y las autoridades administrativas competentes que se hayan hecho parte en el trámite.

(...)" (Resaltado fuera de texto).

Como se puede observar, uno de los requisitos de procedibilidad y legitimación de la autoridad administrativa competente, es que SE HAYA HECHO PARTE EN EL TRÁMITE lo cual no ocurrió en el trámite de licencia adelantado ante el Curador Urbano No 1 en el cual se expidió la Licencia de Construcción No LC 11-1-0266 de Abril 27 de 2011 en el cual no se hizo parte la citada Comisión.

En este orden de ideas, de continuarse con el trámite de revocatoria, con este argumento, se configura una flagrante violación al debido proceso protegido como derecho fundamental por nuestra Constitución Política y que toda autoridad tiene la obligación de respetar".

"1.2.- Pronunciamiento en cuanto al fundamento de hecho esgrimido por el ente veedor.

Señala la mencionada comisión de veeduría que "En la revisión del trámite de expedición de la Licencia de Construcción LC 11-1-0266 del 27 de Abril de 2011, para el predio ubicado en la Avenida Calle 45 A 15 Sur No. 45 A 15 Int. 1 de la Localidad de Tunjuelito, expedida por el Arquitecto Juan Reinaldo Suarez (Sic) Medina ex Curador Urbano No 1, se evidenció por parte de esta Comisión, que el trámite de expedición de licencia no contó con la aprobación previa del anteproyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, en contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 26 del Decreto 606 de 2001 y 3 de la Resolución No. 0199 de 2004"

Sobre el particular, y para efectos del análisis posterior, es importante resaltar que la solicitud de revocatoria nace de la Directora Encargada de Patrimonio y Renovación Urbana en la sesión No 111 del 30 de Enero de 2012.

Por lo antes anotado, es claro que la revocatoria solicitada no procede, no solo por cuanto no se otorga el consentimiento para el efecto, sino porque en nuestro criterio el proyecto contó con el concepto favorable proferido por el Comité Técnico Asesor de Patrimonio.

En efecto, tal y como lo ha manifestado en los fallos citados de su Despacho, las relaciones entre la administración y los ciudadanos se rigen por el principio de seguridad jurídica, en el respeto de los derechos adquiridos, en la presunción de legalidad y en el principio de la buena fe, al que en el caso particular deberíamos agregar el principio de la Economía Procesal. En este marco de principios se resalta que para el trámite de la licencia cuestionada, tanto de parte del Curador Urbano como de la Institución, fuimos respetuosos del cumplimiento de las normas y de los requisitos previstos para el efecto y en ningún momento se desplegó conducta alguna para ir en contravía de dicho cumplimiento.

En este sentido, se resaltan los siguientes aspectos del trámite:

1- Como se puede observar el objeto de la actuación consistió en obtener la licencia de construcción respectiva para construir un comedor para la Policía Nacional - Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander".



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

2.- Producto del estudio técnico pertinente al proyecto, el Curador Urbano expidió el Acta de Observaciones AOC 11-00417 del 15 de Marzo de 2011, y en el punto 2° requirió en cumplimiento del Artículo 3°, numeral 3.7 de la Resolución 0199 de 2004 "Dadas las características de los inmuebles referidos, es oportuno precisar que el desarrollo de nuevas edificaciones colindantes a los inmuebles de Interés Cultural debe contar con la revisión previa del Departamento Administrativo de Planeación, con el fin de verificar su oportuna implantación en el conjunto del Complejo de la Escuela Nacional de la Policía General Santander. Por tal razón se solicita presentar dicha revisión de la implantación del volumen del comedor realizada por la actual Secretaría de Planeación".

3.- No obstante, para tal fin desde el mes de noviembre de 2010 existe una amplia correspondencia cruzada entre esta Institución con la Oficina de Patrimonio y Renovación Urbana de la Ciudad y la Secretaría de Planeación Distrital, entre las que se resalta el radicado 2011-210-000458-2, con el cual en cumplimiento de requerimiento efectuado por el Instituto de Patrimonio Cultural se anexó una copia del proyecto arquitectónico completo del proyecto, resaltando siempre que el concepto que se solicitaba a ese Instituto era requisito dentro del trámite de licencia de construcción que se adelantaba ante la Curaduría Urbana, (Ver oficio con radicación No. 20109000069022 ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural).

4.- Mediante Oficio No. 2-2011-07237 del 8 de Marzo de 2010 la Directora de Patrimonio y Renovación Urbana, nos comunicó que "Este Comité Técnico Asesor de Patrimonio una vez estudiado el caso y viendo que no altera los valores patrimoniales del conjunto patrimonial de la Escuela da concepto favorable a la rotación del volumen siempre y cuando conserve las dimensiones tanto de largo como de ancho aprobadas en el anterior Plan de Regularización y Manejo, y deberá consolidar el perfil urbano manteniendo la altura promedio de las construcciones del mencionado conjunto".

Es evidente que aunque el trámite se encontraba directamente en cabeza del arquitecto Rodrigo Pérez Yosa, quien atendió los requerimientos formulados por parte del Instituto de Patrimonio Cultural como parte del procedimiento establecido para la obtención de la licencia de construcción, el mismo se adelantó con base en un mandato conferido a este profesional a través de un poder que lo faculta para desplegar todas las actividades necesarias para lograr la obtención de la licencia de acuerdo con los parámetros legales. Situación que permite constatar el claro interés de parte de nuestra Institución a fin de garantizar que se cumplan a cabalidad todos y cada uno de los requisitos y parámetros propios de este trámite con estricta sujeción a la legalidad.

Para el efecto basta con verificar la existencia de estas comunicaciones, pues cuando el Comité Técnico Asesor de Patrimonio solicita que se alleguen unos documentos (como copia del proyecto arquitectónico) es evidente que este requerimiento se está efectuando con ocasión de surtir un requisito propio del trámite; el de contar con el concepto favorable de esta oficina antes de dar paso a la expedición de la licencia, como también es claro que dicho concepto se obtuvo finalmente, así consta en la comunicación No. 2-2011-07237 del 8 de Marzo de 2010 suscrita por la Directora de Patrimonio y Renovación Urbana que hace parte del presente documento y en la cual se comunica su concepto favorable, una vez estudiado el caso y considerando que el proyecto presentado no altera los valores patrimoniales de la Escuela considerada en conjunto. Comunicación que



Continuación de la Resolución No. **0702** 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

responde efectivamente a la necesidad de contar con la aprobación de esta Oficina para garantizar que el trámite agotase todos los presupuestos de legalidad

En ese entendido, la entidad asume que para este caso se contó claramente con el concepto favorable por parte de la Oficina de Patrimonio y Renovación Urbana y se cumplió con la aprobación previa del proyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, lo cual queda evidenciado con la respuesta emitida por dicha entidad, configurando un escenario de seguridad y certeza para la Policía Nacional en relación con la legalidad del trámite de obtención de la licencia de construcción objeto de estudio

5 -El concepto antes citado igualmente constituyó uno de los considerandos fundamentales para la expedición de la Resolución No 0650 del 27 de Mayo de 2011 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0199 del 12 de Abril de 2004 "Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo de la Escuela Nacional de Policía General Santander"

De lo anotado me permito resaltar que para llegar a los anteriores pronunciamientos, el Comité requirió el anteproyecto arquitectónico de la propuesta correspondiente al comedor licenciado, por lo que se estimó que se daba por cumplido el requisito y por ello se expidió la licencia requerida".

Que la Dirección de Trámites Administrativos de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación, mediante el memorando 3-2012-03776 del 19 de abril de 2012 envió a la Subsecretaría de Planeación Territorial el escrito presentado por el Director General de la Policía Nacional con el fin de que el mismo fuera tenido en cuenta para efectos de la expedición del concepto técnico (folio 483).

Que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, a través del memorando 3-2012-04601 del 22 de mayo de 2012 expidió el concepto técnico solicitado (folios 500 a 507).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Competencia de la Secretaría Distrital de Planeación para avocar el conocimiento y decidir el trámite de revocatoria directa presentada contra la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

El artículo 69⁴ del Código Contencioso Administrativo, establece que los actos administrativos se revocarán directamente por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, ya sea de oficio o a solicitud de parte.

⁴ "Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, ..."



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

El artículo 43 del Decreto Nacional 1469 de 2010⁵, otorga a los curadores urbanos y a los alcaldes municipales o distritales o sus delegados, la decisión de fondo de los trámites de revocatoria directa de los actos administrativos que otorguen o nieguen licencias urbanísticas.

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. mediante el Decreto 191 de 2006, asignó a esta entidad la competencia para conocer, tramitar y resolver, de oficio o a solicitud de parte, las revocatorias directas de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá otorgan o niegan licencias urbanísticas. En consecuencia, la Secretaría Distrital de Planeación es competente para estudiar y decidir la presente actuación.

2. Legitimidad de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D. C., para solicitar la revocatoria directa de actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos otorgan o niegan licencias urbanísticas.

En relación con el tema, el señor Director General de la Policía Nacional, manifiesta que en el presente caso no se cumple con uno de los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 43 del Decreto Nacional 1469 de 2010, para que pueda válidamente la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá solicitar la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., como es el de haber intervenido dicha Comisión en el trámite de expedición de la citada licencia.

El Despacho no comparte la apreciación del señor Director General de la Policía Nacional, debido a que si bien es cierto, el numeral 2 del artículo 43 del Decreto Nacional 1469 de 2010, señala que:

"2. Podrán solicitar la revocatoria directa de las licencias los solicitantes de las mismas, los vecinos colindantes del predio objeto de la solicitud así como los terceros y las autoridades administrativas competentes que se hayan hecho parte en el trámite".

También lo es, que el mismo Decreto Nacional 1469 de 2010, en norma posterior al fijar las funciones de las Comisiones de Veeduría, señala:

Artículo 134. Funciones de las comisiones de veeduría. Son funciones de las comisiones de veeduría, entre otras, las siguientes:

(...)

2. Interponer, a través de uno de sus miembros, recursos y acciones contra las actuaciones de las curadurías que no se ajusten a la normatividad urbanística; y si fuera del caso, formular las correspondientes denuncias.

⁵ "Artículo 43. De la revocatoria directa. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo con las precisiones señaladas en el presente artículo:

1. Son competentes para adelantar la revocatoria directa de las licencias, el mismo curador que expidió el acto o quien haya sido designado como tal mediante acto administrativo de manera provisional o definitiva, o el alcalde municipal o distrital o su delegado. (...)"



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

(...)" (Negrillas y sublíneas fuera de texto).

En el mismo sentido, para el caso específico del Distrito Capital, el párrafo del artículo 1º del Decreto Distrital 191, *"Por medio del cual se asigna la función de conocer, tramitar y resolver, de oficio o a solicitud de parte, las revocatorias directas de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá D.C., otorguen o nieguen licencias urbanísticas"*, dispone:

"Parágrafo.- Son competentes para solicitar la revocatoria directa de los actos por medio de los cuales se otorgan o niegan licencias, entre otras autoridades y personas, los titulares de las licencias, los vecinos del predio objeto de solicitud, y la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas, a través del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA". (Sublíneas y negrillas fuera de texto).

Así las cosas, de conformidad con las normas citadas, las cuales se encuentran vigentes, no cabe duda que la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá está plenamente facultada para solicitar la revocatoria directa de los actos mediante los cuales los curadores urbanos deciden las solicitudes de licencias urbanísticas, así no haya intervenido en el trámite de expedición de las mismas.

Por lo anterior, en el presente caso no se configura la violación al debido proceso que alega el señor Director de la Policía Nacional y, en consecuencia, no es procedente este planteamiento.

3. Oportunidad

En relación con este aspecto, el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 809 de 2003, establece que la revocatoria directa de los actos administrativos podrá solicitarse en cualquier tiempo. La norma en comento dispone:

"Artículo 71. Oportunidad. La revocación directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aún cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda".

4. Problema jurídico.

Según los argumentos planteados por el Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, le corresponde a este despacho determinar si hay lugar a la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, otorgada por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Para dar respuesta a lo anterior, se hará un análisis de la revocatoria directa de los actos administrativos, seguidamente se establecerá si tal como afirma el secretario técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, la licencia citada infringe la norma



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

urbanística al haberse expedido sin contar previamente con la aprobación del correspondiente Anteproyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, tal como lo exigen el Decreto 606 de 2001 y en la Resolución 0199 de 2004.

Finalmente, se estudiará el argumento del error de hecho alegado por la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, para determinar si procede o no la revocatoria directa.

5. El caso concreto

5.1. Análisis sobre la revocatoria directa de las licencias urbanísticas

El Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, consagra en su Título V la figura jurídica de la revocatoria directa, como un mecanismo que permite a la propia administración, de oficio o a solicitud de parte, la revisión de sus propios actos.

En el artículo 69 de la referida norma, se enuncian de manera taxativa las causales por las cuales pueden ser revocados los actos administrativos, así:

“(…)

ARTÍCULO 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

(…)”

Se constituye así la revocatoria directa, como una prerrogativa de la administración para volver sobre sus propios actos y retirarlos del mundo jurídico, si se presenta alguna de las causales anteriormente enunciadas.

En palabras de la Corte Constitucional, la revocabilidad es una de las características propias del acto administrativo, que se traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad, con miras a asegurar el principio de legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social. Cuando se trate de actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la administración, sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas causales. En cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo o una situación jurídica



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

particular y concreta en favor de una persona no son revocables sino con el consentimiento escrito y expreso del titular del derecho⁶.

En una consagración del principio de inmutabilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto, que ya se encontraba presente en el artículo 21 del Decreto 2733 de 1959, el artículo 73 del C.C.A. establece límites a la potestad revocatoria de la administración, supeditándola a la existencia del consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular. Disponiendo, no obstante la norma en comento, dos excepciones a la intangibilidad de esta clase especial de actos, habilitando a la administración para revocarlos unilateralmente, aún cuando no medie el consentimiento escrito y expreso del titular, cuando los mismos resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69 o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

En este último caso la Jurisprudencia Constitucional trató el tema en la Sentencia T-215 de 2006 cuyo argumento es del siguiente tenor:

"Es claro que no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca. Debe darse una evidencia de ello y, en consecuencia, la motivación del acto revocatorio dejará constancia expresa acerca de los elementos de juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo así".

En otra Sentencia⁷, la Corte Constitucional explicó que, "El ordenamiento jurídico colombiano contempla dos (2) excepciones a la regla prescrita en el numeral (i) es decir, hipótesis en las cuales puede darse una revocatoria directa constitucional sin consentimiento del administrado: a) cuando la situación subjetiva consolidada fue producto del silencio administrativo positivo. b) cuando fue producto de maniobras evidente y probadamente fraudulentas, violando la Constitución y la ley. Del punto b), es posible inferir que la ilegalidad que generó el nacimiento a la vida jurídica del derecho subjetivo no puede presumirse, y que la revocatoria directa no puede fungir como medida cautelar ante la mera sospecha de fraude"

Así las cosas, el artículo 73⁸ del C. C. A. expresa que los actos administrativos que tengan efectos particulares y concretos, no pueden ser revocados, sin contar con el consentimiento expreso y escrito de sus titulares; sin embargo, el inciso segundo del citado artículo, por excepción, prevé esa posibilidad sin el precitado beneplácito, en los siguientes eventos:

- Cuando resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo⁹, si se dan las causales previstas en el artículo 69¹⁰ del C. C. A.

⁶ Corte Constitucional, SENTENCIA T-347/94, 3 de agosto de 1994.

⁷ Sentencia T-723 de 2008

⁸ "ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales." (Negrillas y subrayas fuera de texto).



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

• **Si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.**

En relación con las excepciones consagradas en el inciso segundo del artículo 73 del C.C.A, la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado mediante sentencia de interés jurídico¹¹, expresó:

“(…)

La interpretación que hizo la Sala del artículo 73 del C. C. A. sólo contempló la posibilidad que tienen las autoridades de revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento del particular, cuando se derive del silencio administrativo positivo, planteamiento que revisa la sala en esta oportunidad, pues una nueva lectura del citado artículo 73 del decreto 01 de 1984 permite ampliar el alcance que otrora señaló esta corporación y llegar a una conclusión diferente.

(…)

Nótese que en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.

Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.

Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.

⁹ Previsto en el artículo 41 del C. C. A.: “**ARTÍCULO 41.** Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. ... Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación. ... El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74.” (Negritas y subrayas fuera de texto)

¹⁰ “**ARTÍCULO 69.** Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: ... 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. ... 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. ... 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

¹¹ Consejo de Estado - Consejero Ponente Dra.: ANA MARGARITA OLAYA FORERO - Fecha: Julio 16 de 2002- No. de Rad.: IJ-029-02.



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.

(...)

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A...)

De la lectura del extracto transcrito, puede inferirse que es claro que aunque nuestra legislación consagra el principio de inmutabilidad de los actos de contenido particular y concreto, la administración ostenta la facultad de retirar del ordenamiento jurídico dichos actos sin el consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular, restringida estrictamente a la ocurrencia de los dos (2) eventos mencionados anteriormente.

De otra parte, la Corte Constitucional en las sentencias T-494/09 del 23 de julio de 2009 y T-949/10 del 25 de noviembre de 2010, señaló:

“En lo que concierne a la revocatoria o suspensión unilateral de un acto administrativo particular y concreto, la Corte ha señalado que, por regla general, sólo se puede efectuar con el consentimiento expreso del titular, excepto en los casos en los que se compruebe una manifiesta ilegalidad, situación extraordinaria que busca proteger el interés público, donde lo que se debe agotar es el procedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo¹² e iniciar las acciones fiscales, judiciales, penales y disciplinarias pertinentes, en procura de la restitución de los recursos y la imposición de las sanciones que corresponda, ante las actuaciones ilícitas.

(...)

En la misma sentencia (C-835 de 2003) se estableció, además, que cuando se deba revocar el correspondiente acto administrativo, “será necesario el consentimiento expreso y escrito del titular, y en su defecto, el de sus causahabientes. De no lograrse este consentimiento, la entidad emisora del acto en cuestión deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pues: ‘razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las

¹² Cfr. T-376 de agosto 21 de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara; T-639 de noviembre 22 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-336 de julio 15 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo; C-672 de junio 28 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis y C-835 de septiembre 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería.



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo”.

Igualmente, en esa misma providencia se expresó que basta con la tipificación de la conducta como delito para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal; por consiguiente, como se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad, “la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias”.

(...)

*Frente a lo anterior, es importante aclarar, como se refirió en precedencia, que por regla general, para revocar un acto administrativo de forma unilateral se necesita el previo consentimiento expreso del involucrado, excepto en los casos en los que exista **manifiesta ilegalidad**.*

En la precitada sentencia T-776 de 2008, fueron contempladas tres diferentes situaciones: “(i) la Administración tendrá la facultad de revocar su propio acto aún sin consentimiento del beneficiario, siempre que se agote como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo y que se identifiquen en la conformación del acto administrativo censurado conductas tipificadas en la ley penal, ‘aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal’ ; (ii) se podrá revocar unilateralmente el acto propio cuando éste sea fruto de silencio administrativo positivo de acuerdo al artículo 73 del Código Contencioso Administrativo; (iii) la Administración deberá acudir directa e indefectiblemente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no identifican en el acto que las irregularidades o anomalías constituyen conductas tipificadas en la ley penal.”

Así las cosas, de acuerdo con lo explicado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ser una excepción, la regla de revocatoria sin consentimiento de actos particulares debe interpretarse de forma restrictiva, y en consecuencia no puede aplicarse con base en sospechas, sino que es necesario “(...) que se identifiquen en la conformación del acto administrativo censurado conductas tipificadas en la ley penal”¹³, o que se trate de “...una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico”¹⁴

Significa lo expuesto que, la administración solamente puede revocar un acto administrativo sin el consentimiento expreso y escrito del titular de los derechos de carácter particular y concreto reconocidos en él, cuando del estudio de la actuación administrativa se infiera sin lugar a dudas que la expedición del acto ocurrió por alguno de los vicios de la voluntad, esto es, error, fuerza o dolo, bien que recaiga sobre el objeto de la actuación o respecto de cualquiera de los sujetos que en ella intervinieron.

¹³ Sentencia T-949 de 2010

¹⁴ Sentencia T-215 de 2006



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

5.2 De la presunta vulneración de la norma urbana

El Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C., en su escrito de solicitud de revocatoria directa señaló que el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. infringió la normativa urbanística al otorgar la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, debido a que el trámite de expedición de la citada licencia no contó con la aprobación previa del anteproyecto por parte del Comité Técnico Asesor de Patrimonio. Esto, en contravención de lo previsto en los artículos 26 del Decreto 606 de 2001 y 3 de la Resolución No. 0199 de 2004.

El Director General de la Policía Nacional, por su parte señaló que el proyecto sí obtuvo el concepto favorable requerido, ya que por parte de la institución se presentaron varias radicaciones ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, anexando copia del proyecto arquitectónico completo. Entre las radicaciones citadas menciona las distinguidas con los Nos. 2011-210-000458-2 y 20109000069022.

Así, precisa que dicho concepto favorable fue dado finalmente a través del oficio No. 2-2011-07237 del 8 de marzo de 2011, mediante el cual la Directora de Patrimonio y Renovación Urbana, informó:

"Este Comité Técnico Asesor de Patrimonio una vez estudiado el caso y viendo que no altera los valores patrimoniales del conjunto patrimonial de la Escuela da concepto favorable a la rotación del volumen siempre y cuando conserve las dimensiones tanto de largo como de ancho aprobadas en el anterior Plan de Regularización y Manejo, y deberá consolidar el perfil urbano manteniendo la altura promedio de las construcciones del mencionado conjunto".

Agrega el Director de la Policía Nacional, que:

"El concepto antes citado igualmente constituyó uno de los considerandos fundamentales para la expedición de la Resolución No 0650 del 27 de Mayo de 2011 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0199 del 12 de Abril de 2004 "Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo de la Escuela Nacional de Policía General Santander"

De lo anotado me permito resaltar que para llegar a los anteriores pronunciamientos, el Comité requirió el anteproyecto arquitectónico de la propuesta correspondiente al comedor licenciado, por lo que se estimó que se daba por cumplido el requisito y por ello se expidió la licencia requerida".

La parte técnica, mediante el memorando 3-2012-04601 del 22 de mayo de 2012, el cual forma parte integrante de la presente decisión, en relación con lo expuesto por la Comisión de Veeduría



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

de las Curadurías Urbanas de Bogotá y por el Director General de la Policía Nacional, informó lo siguiente:

- El listado anexo No. 1 del Decreto Distrital 606 de 2001, incluyó el predio de la Calle 45 A Sur No. 45 A-15 Carrera 33 No. 48 A-15 Sur, dentro del inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI).
- El artículo 26 del Decreto Distrital 606 de 2001, dispuso que *“Todo tipo de obra propuesto para los Inmuebles objeto de la presente reglamentación, requiere de un anteproyecto aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, previo concepto del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, como requisito previo a la solicitud de licencia ante la Curaduría Urbana. (...)”*. (Negrillas y sublíneas fuera de texto)
- El artículo 1 del Decreto Distrital 048 de 2007, asignó *“(...) al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la facultad de aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital, de que tratan los artículos 310, literal f, y 314 del Decreto Distrital 190 de 2004, con base en el concepto del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, creado para el efecto”*.

Es decir, que a partir de la expedición del Decreto Distrital 048 de 2007, la facultad que tenía el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hoy Secretaría Distrital de Planeación, para aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital, se trasladó al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, pasando así mismo el Comité Técnico Asesor de Patrimonio a ser una instancia asesora del citado Instituto.

- De otro lado, la Resolución 0199 del 17 de abril de 2004, *“Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo de la Escuela Nacional de Policía General Santander”*, en el artículo 3, numeral 3.7. **Acciones especiales**, señaló que:

“De acuerdo con su condición de Bien de Interés Cultural, las edificaciones correspondientes al eje central del conjunto de la Escuela comprendidas entre la Avenida 27 y la avenida interna de la Escuela denominada Carabineros, la totalidad de las edificaciones que se localizan en la manzana de las pesebreras y el pabellón de equinos, la iglesia, el teatro, la gradería, el campo de ceremonias y sanidad, dado que cuentan con valor arquitectónico y de conjunto y conforme a lo establecido en el artículo 301, literal f del Decreto 619 de 2000, se sujetarán previamente a cualquier intervención para su recuperación u otra obra similar a la presentación de un anteproyecto a consideración del Departamento Administrativo de Planeación Distrital¹⁵ para su correspondiente aprobación” (folio 508). (Negrillas y sublíneas fuera de texto).

Agrega el concepto técnico, que la Resolución 0199 de 2004:

¹⁵ Como se indicó en precedencia, a partir de la expedición del Decreto Distrital 048 de 2007, la aprobación de intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital es competencia del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

"Continúa diciendo que "...Dadas las características de los inmuebles referidos, es oportuno precisar que el desarrollo de nuevas edificaciones colindantes a Inmueble de Interés Cultural debe contar con la revisión previa del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, con el fin de verificar su oportuna implantación en el conjunto del complejo de la Escuela Nacional de la Policía General Santander."

Es importante resaltar que la Resolución 0199/2004 fue modificada mediante la Resolución 0336 del 13 de Mayo de 2008, la cual modifica el Cronograma de Ejecución, pero no cambia las consideraciones generales de intervención en el predio perteneciente a la Escuela de Policía General Santander, ni de las intervenciones en edificaciones patrimoniales.

Aunque la Resolución 0199 / 2004 fue modificada parcialmente por la Resolución 0650 del 27 de mayo de 2011, (modificación motivada ante la solicitud con radicación 1-2010-48716 de noviembre 25 de 2010) está última no se tuvo en cuenta para el análisis de la revocatoria que nos ocupa, ya que para la fecha de expedición de la Licencia de Construcción esta no se encontraba vigente. La Licencia de Construcción No. L.C 11-1-0266 fue expedida el 27 de abril de 2011 y ejecutoriada el 20 de mayo de 2011".

- Referente a lo planteado por el Director General de la policía Nacional, el concepto técnico, precisó:

"Finalmente, haciendo alusión al radicado 1-2012-17590 de abril 19 de 2012 del Director General de la Policía Nacional, el oficio 2-2011-07237 de marzo 8 de 2011 y no de 2010 (como se esgrime en el citado radicado- folio 153 del expediente de la Licencia de Construcción en controversia) corresponde a un oficio adicional dirigido al Sr. Rodrigo Pérez emitido por la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, paralelo al Memorando 3-2011-02788 del 8 de marzo de 2011 con el cual la misma Dirección emite respuesta a la solicitud de concepto sobre el componente patrimonial realizada por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la SDP mediante el Memorando 3-2011-02146 dentro del trámite de modificación del Plan de Regularización y Manejo adoptado mediante la Resolución 0199/2004. Tanto en el texto del oficio adicional 2-2011-07237 como en el del Memorando de respuesta a la Dirección de Planes Maestros y Complementarios 3-2011-02788, ambos de marzo 8 de 2011, se establece textualmente lo siguiente:

"...En atención a su solicitud de concepto por parte de la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de esta Secretaría Distrital de Planeación, con relación a la formulación del Plan de Regularización y Manejo de la referencia, le informamos que esta fue presentada ante el Comité Técnico Asesor de Patrimonio en la sesión No. 02 celebrada el pasado 02 de marzo de 2011, donde se conceptuó lo siguiente:

"Este Comité Técnico Asesor de Patrimonio una vez estudiado el caso y viendo que no altera los valores patrimoniales del conjunto patrimonial de la Escuela da concepto favorable a la rotación del volumen siempre y cuando conserve las dimensiones tanto de largo como de ancho aprobadas en el anterior Plan de Regularización y Manejo, y deberá consolidar el perfil urbano manteniendo la altura promedio de las construcciones del mencionado conjunto.



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Se aclara que una vez sea expedida la modificación del Plan de Regularización y Manejo, cualquier intervención deberá tener concepto previo y favorable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural”.

(...)

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Distrital 048 / 2007 mediante el cual el Alcalde Mayor asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la facultad de aprobar las intervenciones en los Bienes, la Secretaría Distrital de Planeación no tiene competencia para la aprobación de intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital pues esta recae en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural; el oficio adicional 2-2011-07237 de marzo 8 de 2011 expedido por la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana se expidió con un interés informativo al interesado en el trámite de la modificación del Plan de Regularización y Manejo, paralelo al Memorando 3-2011-02788 del 8 de marzo de 2011 con el cual la misma Dirección emite respuesta a la solicitud de concepto sobre el componente patrimonial realizada por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la SDP mediante el Memorando 3-2011-02146 dentro del trámite de modificación del Plan de Regularización y Manejo adoptado mediante la Resolución 0199/2004”.

- Para finalizar, el concepto técnico presentó las siguientes:

“CONCLUSIONES DEL ANALISIS NORMATIVO:

La Licencia de Construcción, se acogió a la Resolución No. 0199 del 12 de abril de 2004, donde la orientación del edificio era diferente a la de la mencionada licencia de construcción la cual fue modificada por la Resolución 0650 de mayo 27 de 2011, que adopta “el plano denominado 1-1 , en reemplazo del plano No. 1 señalado en el artículo 1º, y en el numeral 3.4 del artículo 3º de la Resolución 199/2004.”, siendo esta última sobre la cual debió haberse expedido dicha Licencia.

En la Resolución No. 0199 del 12 de abril de 2004, se enuncian cuáles son las edificaciones que cuentan con valor patrimonial dentro de todo el complejo de la Escuela, y éste no se excluyó del predio del Tratamiento de Conservación, por lo que toda intervención a realizar en el predio con declaratoria de Interés Cultural o en sus colindantes debe tener concepto previo y favorable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Previo a la expedición de la Licencia de Construcción No. L.C 11-1-0266 de 2011, se requería concepto previo y favorable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, quien se pronunciaría dentro de su competencia. El acto administrativo mediante el cual el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural debió emitir concepto favorable para la intervención propuesta en el Inmueble de Interés Cultural, no se encuentra acompañando la expedición de la Licencia de Construcción”. (Negrillas y sublíneas fuera de texto).

Así las cosas, de conformidad con lo concluido por Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, para la expedición de la Licencia de Construcción No. L.C 11-1-0266 de 2011 del 27 de abril de 2011, por parte del entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., no se contó con el



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

concepto previo favorable para la intervención propuesta, expedido por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el cual era necesario por tratarse de un Inmueble de Interés Cultural, al tenor de lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Distrital 606 de 2001 y 3 de la Resolución 0199 de 2004.

Conviene precisar, que no es procedente el argumentado expuesto por el Director General de la Policía Nacional, quien señala que sí se obtuvo el concepto favorable en cuestión, ya que se presentaron ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural algunas radicaciones y, la Directora de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, mediante el oficio No. 2-2011-07237 del 8 de marzo de 2011, informó:

"...En atención a su solicitud de concepto por parte de la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de esta Secretaría Distrital de Planeación, con relación a la formulación del Plan de Regularización y Manejo de la referencia, le informamos que esta fue presentada ante el Comité Técnico Asesor de Patrimonio en la sesión No. 02 celebrada el pasado 02 de marzo de 2011, donde se conceptuó lo siguiente:

"Este Comité Técnico Asesor de Patrimonio una vez estudiado el caso y viendo que no altera los valores patrimoniales del conjunto patrimonial de la Escuela da concepto favorable a la rotación del volumen siempre y cuando conserve las dimensiones tanto de largo como de ancho aprobadas en el anterior Plan de Regularización y Manejo, y deberá consolidar el perfil urbano manteniendo la altura promedio de las construcciones del mencionado conjunto.

Dicho planteamiento no es de recibo, por cuanto en el mismo oficio se advierte que este corresponde a la "(...) *solicitud de concepto por parte de la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de esta Secretaría Distrital de Planeación, con relación a la formulación del Plan de Regularización y Manejo de la referencia (...)*"¹⁶ (Negritas y sublíneas fuera de texto), no al trámite de expedición de la licencia objeto de revocatoria.

Además, en el último párrafo del referido oficio, se advierte que Comité Técnico Asesor de Patrimonio en la sesión No. 02 celebrada el 02 de marzo de 2011, aclaró (folio 493):

"(...) que una vez sea expedida la modificación del Plan de Regularización y Manejo, cualquier intervención deberá tener concepto previo y favorable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural". (Negritas y sublíneas fuera de texto).

Según lo indicado en precedencia, es evidente que el concepto que el Director General de la Policía Nacional quiere hacer valer como concepto favorable para efectos de la expedición de la Licencia de Construcción No. L.C 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, corresponde a un trámite distinto. En este sentido, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana en el concepto técnico, precisa que:

¹⁶ Radicaciones 1-2011-05435/3-2011-02146.



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

El oficio 2-2011-07237 de marzo 8 de 2011, al que alude el Director General de la Policía Nacional, corresponde a un oficio adicional, paralelo al memorando 3-2011-02788 del 8 de marzo de 2011 con el cual la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana "(...) emite respuesta a la solicitud de concepto sobre el componente patrimonial realizada por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la SDP mediante el Memorando 3-2011-02146 dentro del trámite de modificación del Plan de Regularización y Manejo adoptado mediante la Resolución 0199/2004".

El concepto técnico, además, hace ver que "(...) la Secretaría Distrital de Planeación no tiene competencia para la aprobación de intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital pues esta recae en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (...) "¹⁷ y, por lo mismo, el oficio adicional 2-2011-07237 de marzo 8 de 2011 expedido por la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, no puede suplir el concepto favorable requerido para efectos de la expedición de la licencia de construcción, como afirma el Director General de la Policía Nacional.

El memorando 3-2011-02788 del 8 de marzo de 2011, paralelo y similar oficio 2-2011-07237 de marzo 8 de 2011, fue emitido por la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana dentro del trámite de expedición de la Resolución 0650 del 27 de mayo de 2011, "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0199 del 12 de abril de 2004 "Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo de la Escuela Nacional de Policía General Santander" y, la referida resolución no fue tenida en cuenta por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. al momento de aprobar la Licencia de Construcción No. L.C 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, debido a que ésta última se expidió un mes antes.

Así las cosas, asiste razón a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá cuando señala que la Licencia de Construcción No. L.C 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, fue expedida por entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., sin contar con el concepto favorable previsto en el artículo 26 del Decreto Distrital 606 de 2001 y 3 de la Resolución 0199 de 2004, expedida por el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hoy Secretaría Distrital de Planeación.

5.3 Del supuesto error de hecho

En el presente caso, el Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, manifiesta que por parte del entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., arquitecto Juan Reinaldo Suárez Medina, se incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas obrantes en el expediente, ya que en contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 26 del Decreto 606 de 2001 y 3 de la Resolución No. 0199 de 2004, aprobó la intervención de un Bien de Interés Cultural, sin contar con la autorización previa del anteproyecto arquitectónico, expedida por el Comité Técnico Asesor de Patrimonio.

¹⁷ A partir de la expedición del Decreto Distrital 048 de 2007.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Señala en consecuencia, la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, que dada la inexistencia del documento citado, se presenta un vicio de la voluntad que llevó al entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. a expedir irregularmente la licencia mencionada, configurándose por lo mismo el medio ilegal por error en la interpretación de las pruebas lo cual motiva la solicitud de la revocatoria directa que nos ocupa.

Para dar respuesta al anterior argumento es necesario precisar, que entre los vicios de la voluntad en la celebración de los actos jurídicos se encuentra el error, que significa conocer algo, pero de manera falsa. Además, se debe aclarar, que cuando el error o la ignorancia afectan algún elemento del acto jurídico o las condiciones o circunstancias en que se lleva a cabo éste, hablamos de error de hecho, a diferencia del error de derecho, que recae sobre la interpretación de normas jurídicas que se aplican al caso concreto.

El error de hecho se puede dar en la apreciación de las pruebas, cuando el juzgador no le da el valor que tiene una prueba o se equivoca en su valoración, en todo caso, el mismo debe estar debidamente probado, pues la sola manifestación de su existencia no es motivo suficiente para concluir que existió un medio ilegal.

En efecto, el ordenamiento positivo exige que la manifestación de voluntad de las personas que producen un acto jurídico sea consciente y libre, esto es, que no esté afectada por irregularidades que, genéricamente, la ley y en la doctrina denominan vicios del consentimiento, esto es, error, fuerza y dolo (Art. 1508 del Código Civil). La fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma. El dolo es toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del negocio jurídico y que induce o provoca un error en él. El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representación mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento.

Para los efectos de este examen interesa en particular definir el error de hecho. En relación con este tipo de error la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dice que se incurre en error de hecho "cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, bien porque se supone el medio inexistente, se pretermite el existente o se le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido objetivo, alterándolo"

La jurisprudencia del Consejo de Estado¹⁸ también se ha pronunciado al respecto, así:

"En efecto, recuérdese que al quebrantamiento de las normas de derecho sustancial puede llegarse por dos vías diferentes: la directa y la indirecta; la primera cuando con independencia de la prueba, el juzgador al dictar sentencia, infringe la norma por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea; al paso que en la segunda incurre en esa violación por errores en relación con las pruebas producidas en el

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente, Ruth Stella Correa Palacio. Fecha, 16 de junio de 2008. Radicación 11001-03-26-000-2007-00061-00 (34543). Actor: Teleacceso S.A. en liquidación. Demandado, Colombia Móvil S.A. ESP.



Continuación de la Resolución No. **0702** 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

proceso para acreditar las circunstancias fácticas relevantes del litigio, bien por error de hecho evidente o manifiesto o bien por error de derecho.¹⁹

Suficientemente se encuentra decantado en la jurisprudencia que el error probatorio de hecho ocurre cuando el Tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, en cuanto la omitió, ignoró o creyó que existía o al apreciarla distorsionó la situación fáctica²⁰

Como lo establece la jurisprudencia, el error de hecho hace referencia a la valoración probatoria; nótese que se produce cuando se ignora una prueba que se encuentra de forma válida en el proceso o se supone como existente una que no ha sido incorporada, (*falso juicio de existencia*), o cuando distorsiona o tergiversa su contenido fáctico atribuyéndole efectos que no se derivan de ella (*falso juicio de identidad*).

Para el caso concreto, conforme a lo expresado en punto anterior, en la actuación, se observa que se presentó una trasgresión a la normativa urbanística, al inobservar el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., las disposiciones a las cuales debía someter la actuación; sin embargo, dicha situación se enmarca en una ilegalidad, y no en un medio ilegal como quiera que este despacho no tiene los fundamentos suficientes para determinar la utilización de medios ilegales en la producción del acto administrativo objeto de estudio, y en esa medida, no es acertado señalar como afirma la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá que haya existido un error de hecho determinante de la no aplicación de las normas referidas. En este sentido, es conveniente traer a cuento lo expresado por el Consejo de Estado, cuando en Sentencia de Interés Jurídico expresó²¹:

(...)

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como

¹⁹ En cuanto al error de hecho y error de derecho en general, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: Sentencia N° 065 de fecha 13 de julio de 1995; Sentencia N° 34 de fecha 10 de agosto de 1999; Sentencia N° 035 de fecha 17 de agosto de 1999; Sentencia N° 111 de fecha 1° de diciembre de 1999; Sentencia de fecha 19 de octubre de 2000; exp. 5442; Sentencia de fecha 23 de febrero de 2001, exp. 5619. Respecto de error de hecho: Sentencia N° 06 de fecha 12 de febrero de 1998; Sentencia N° 04 de fecha 11 de marzo de 1999; Sentencia de fecha 14 de febrero de 2001; exp. 6347; Sentencia de fecha 23 de febrero de 2001, exp. 6399; Sentencia de fecha 21 de mayo de 2001; exp. 5924; Sentencia de fecha 15 de marzo de 2001 exp. 6142; Sentencia N° 80 de fecha 18 de septiembre de 1998; Sentencia N° 90 de fecha 22 de octubre de 1998; Sentencia N° 006 de fecha 12 de febrero de 1998; Sentencia N° 11 de fecha 3 de marzo de 1998; Sentencia N° 80 de fecha 18 de septiembre de 1998; Sentencia N° 28 de fecha 27 de julio de 1999; Sentencia de fecha 14 de mayo de 2001; exp. 6752; Sentencia de fecha 14 de mayo de 2001; exp. 6752; Sentencia de fecha 15 de septiembre de 1993, reiterada en sentencia de junio 28 de 2000, exp.: 5430; Sentencia de fecha 27 de marzo de 2001; exp. 5676; Sentencia de fecha 2 de febrero de 2001; exp. 5670. Y Sobre error de derecho: Auto No.307 de 25 de noviembre de 1997; Sentencia No. 009 de 22 de abril de 1997; Sentencia N° 019 de fecha 8 de junio de 1999; Sentencia 28 del 11 de noviembre de 1999, entre otras.

²⁰ Vid. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 34 de 10 de agosto de 1999.

²¹ Consejo de Estado - Consejero Ponente Dra.: ANA MARGARITA OLAYA FORERO - Fecha: Julio 16 de 2002- No. de Rad.: IJ-029-02.



Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A...)".

Así, de la revisión del expediente y de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia y doctrina referida, se establece que el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., al no observar la normativa aplicable al caso concreto, incurrió en una trasgresión a la misma, sin que ello signifique que tal situación se haya generado por un error de hecho, pues pese a que se evidenció el desconocimiento de las disposiciones a las cuales debía someterse, no es posible afirmar o deducir que el referido acto administrativo sea producto o resultado de la ocurrencia de un acto ilícito que haya influido en la libre manifestación del entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. de la ciudad, requisito señalado en el inciso 2º del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para revocar directamente los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento expreso y escrito del titular, el cual, en el caso que nos ocupa fue negado de manera expresa y escrita mediante la radicación 1-2012-17590 del 18 de abril de 2012, por el Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, quien actúa en su calidad de Director General de la Policía Nacional (folio 484).

De esta forma, el incumplimiento de la normativa urbanística en que se incurrió al expedirse la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, por parte del entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., se encuadra en la causal primera del artículo 69 del C.C.A., y no en la última parte del inciso segundo del artículo 73 del C.C.A. Por tanto, conforme a los lineamientos señalados en la Sentencia de Interés Jurídico IJ-029-2002²² proferida por el Consejo de Estado, la referida

²² En el mismo sentido, la Sentencia de Interés Jurídico IJ – 029 – 02 del 16 de julio de 2002, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero, expresa:

"(...)

Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley. La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.

"(...)

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A.

"(...)"

**Continuación de la Resolución No. 0702 12 JUN. 2012**

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

resolución no puede ser objeto de revocatoria directa. En consecuencia, esta Secretaría se abstendrá de revocar el referido acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

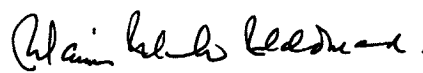
ARTÍCULO 1º. No revocar la Licencia de Construcción No. LC 11-1-0266 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.




ARTÍCULO 2º. Notificar el contenido del esta decisión al doctor al doctor José Andrés Ríos Vega, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D. C. y al señor Rodrigo Pérez Yosa, en su condición de apoderado de la Policía Nacional para efectos de notificaciones, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 3º. En firme el presente acto administrativo, devolver el expediente a la Curaduría Urbana 1 de Bogotá D.C.

Dada en Bogotá D.C., a los 12 JUN. 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


MARIA MERCEDES MALDONADO COPELLO
Secretaria Distrital de Planeación

Aprobó: Diego Isaías Peña Porras. Subsecretario Jurídico. 
Revisó: Adriana del Pilar Vergara Sánchez. Directora de Trámites Administrativos. 
Proyectó: Juan de Jesús Vega F. Profesional Especializado. 

30-V-12.